

# El informe Alston

El Relator expresa su preocupación por el término 'falsos positivos'.



YOLANDA REYES

No hay palabras para aliviar el dolor del asesinato de un hijo, ni dinero que lo devuelva a la vida. Por eso, duele tanto que las víctimas de 'falsos positivos' hayan recibido un tratamiento de saldos negativos y que, para hundir la Ley de Víctimas, sí hayamos aceptado estar en recesión, como si la vida humana fuera un balance de pérdidas y ganancias.

Por eso, duele también que el Presidente haya recomendado a los militares "no dejarse acomplejar por falsas acusaciones". Aunque acomplejar no es la palabra, sino responder, tanto el Ejército, como la sociedad y el Presidente les estamos debiendo a las víctimas un Nunca Más y una condena sin atenuantes a quienes los han secuestrado, asesinado o desplazado, así sean de la guerrilla, de los paramilitares, de los narcos o del Ejército.

Pero, a propósito de "acomplejarnos", es eso y más lo que se siente al leer el informe preliminar de Philip Alston, el relator de las Naciones Unidas, que entrevistó a un centenar de víctimas y se reunió con representantes del Gobierno, del Ejército y de todas las ramas del poder para investigar las llamadas ejecuciones extrajudiciales. Si bien su informe reconoce "la mejora dramática en la situación de seguridad desde el 2002" y agradece la invitación del Presidente, afirma que "queda mucho por hacer".

Alston expresa su preocupación por el término 'falsos positivos', pues confiere cierta aura técnica a una práctica que podría describirse mejor como "el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes" y dice que centrarlo en Soacha "fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo". Aunque califica de obscenas las matanzas de Soacha, reporta otras similares en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada y señala que "una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas".

Entre los muertos, Alston menciona a adolescentes y a un hombre con edad mental de 9 años. Uniformes recién planchados, botas cuatro tallas más grandes y zurdos con armas en la mano derecha lo hacen pensar que se trata de matanzas con un patrón común, "llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército". Denuncia "el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes" y cita a una madre amenazada, que no solo perdió a su hijo, muerto como supuesto guerrillero, sino al otro, que denunció la desaparición del hermano y fue asesinado de un disparo.

Con respecto a la pregunta sobre los responsables de las matanzas, Alston no halla pruebas que indiquen conocimiento del Presidente ni de los ministros de Defensa, pero habla de "la brecha preocupante entre las políticas y la práctica" y afirma que la explicación preferida por muchos en el Gobierno, según la cual hay unas cuantas "manzanas podridas", resulta "insostenible". "La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados y, a veces, asesinados... Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos... Estas declaraciones los estigmatizan", advierte y recomienda a "los funcionarios de alto rango poner fin a esa estigmatización".

Soy consciente del abuso de comillas, pero es que no salgo de mi estupor y aún no sé qué me aterrará más: si el contenido del informe o las escasas reacciones que ha suscitado. Les recomiendo buscarlo en Internet, para que después no digan que nadie les contó lo que pasaba en su casa. A veces suele suceder: cuanto más cerca, menos se ve. Eso estará pensando el profesor Alston, mientras redacta su informe final y nos mira estupefacto, con esa perspectiva que le confiere la distancia.